

DEA, droga y soberanía del Estado

Los
entretelones
de la
estrategia
Bush

El
fortalecimiento
de los lazos de
dependencia

Nadie discute la magnitud del problema de la droga. El crecimiento del consumo y tráfico de estas sustancias productoras de daños físicos y psicológicos en sus adictos presenta situaciones cada vez más complejas que afectan a todas las dimensiones de la vida personal y social de nuestras colectividades. Sin olvidar la importancia que tienen otros aspectos, quisieramos hacer algunas reflexiones sobre las vinculaciones entre droga y política, naturalmente motivadas por los acontecimientos que se han vivido en las últimas semanas en Venezuela y por la necesidad de prever las consecuencias que los múltiples cambios en esta esfera, tanto internos como externos se van sucediendo.

En 1989 el Presidente de los Estados Unidos, George Bush, propuso su estrategia antidroga en base a dos polos: reducción de la demanda, es decir, del consumo dentro de los Estados Unidos y de la oferta, golpeando el origen de la droga (cultivos, laboratorios, redes de distribución) en América Latina, especialmente en Colombia. La Drug Enforcement Agency (D.E.A.) sería el organismo encargado de llevar adelante esta estrategia.

Continuamente se nos informan los supuestos grandes éxitos en la reducción del consumo dentro de los Estados Unidos. En cifras recientemente publicadas por la revista Newsweek se establece que el número de consumidores de drogas ha disminuido dentro de los EE.UU. de 23 a 13 millones entre 1985 y 1990. Sin embargo, el mismo reportaje señala cómo la DEA calcula que entre 1988 y 1990 el volumen de producción de cocaína se ha duplicado (de 360 a 700 toneladas) y vaticina que en 1991 será de unas mil toneladas.

Estas cifras llevan a los norteamericanos a insistir que el problema está en América Latina, lo cual es una falacia encubridora no sólo de la verdad sobre la droga, sino encubridora de las intenciones políticas de la estrategia para combatirlas. ¿Cómo la mayor potencia económica e intelectualmente defensora del "mercado" como el mágico mecanismo regulador de las relaciones económicas puede sostener con seriedad que el problema es la oferta (producción) de droga? ¿Acaso los productores lo hacen para ocupar su "tiempo libre"? Si el volumen producido de coca se casi triplica en tres años y sus precios no bajan, sino, más bien tienden a subir ¿cuál es la conclusión que hay que sacar? ¿Que se consume menos? ¿Será, entonces, que los productores son malos negociantes y se comen la coca o la disuelven en el mar caribe? Si no hay mercado, si el negocio no es rentable, la producción se hubiera venido abajo. ¡No intenten engañarnos!

De esta manera de enfocar el problema por parte del Gobierno Norteamericano y sus "agencias" es que surge la sospecha sobre la existencia de otras intenciones envueltas en el lustroso papel del combate al problema de la droga. El mismo tipo de tergiversaciones e intentos de camuflaje hemos experimentado los venezolanos en relación a la cuestión petrolera. Mientras la Agencia Internacional de la Energía (AIE) establecía una egoísta estrategia económica de defensa de los intereses de las grandes potencias occidentales, se echaba toda la culpa de la distorsión petrolera a la OPEP y sus tercermundistas países miembros.

En estos mismos años, la situación política internacional ha variado cualitativamente. El conflicto Este-Oeste mantuvo por varias décadas un enfrentamiento ideológico de la lucha por la hegemonía mundial. La supuesta lucha contra el narcotráfico fue inicialmente ubicada en este marco. Todos podemos recordar cómo se intentó vincular el tráfico de droga a los movimientos revolucionarios latinoamericanos. Se acusó a la guerrilla colombiana, al sandinismo, la Frente Farabundo Martí... y, evidentemente, al socialismo cubano y a Fidel Castro de ser los conductos y beneficiarios del tráfico de drogas. En fin de cuentas, si el socialismo era el mayor enemigo de la humanidad y la droga otro del mismo calibre sólo ellos podían ser los responsables. De allí que la CIA (Central Intelligence Agency) se ocupara tanto de la subversión como de su hijo natural, el narcotráfico.

Por arte de magia el escenario cambió. El conflicto ideológico pasó a segundo plano y ahora el problema es de lucha contra el delito. El narcotráfico es un delito de lesa humanidad y su madre es la corrupción. Los países latinoamericanos son otra vez el blanco de la estrategia: antes por guerrilleros, ahora por corruptos e incapaces. La DEA entra, entonces, en escena a combatir esta nueva manifestación del mal.

Es difícil, muy difícil que no se sospeche de la relación entre la estrategia norteamericana de transnacionalización de las economías de América Latina, y el esfuerzo por ubicar aquí el punto focal de la lucha contra la droga, liderizada por ellos mismos. Resulta casi evidente que los Estados Unidos están utilizando el grave problema del narcotráfico en función de sus intereses internacionales y no están buscando su solución real y efectiva.

Nuestras debilidades como Estado Nacional

Política, policía y droga

El meollo del problema

Entre nosotros se ha hecho una verdad indiscutida la imagen del "Estado Omnipotente" para describir al venezolano. Imagen de creación también interesada. Nos cuesta ver y reconocer la gran debilidad del Estado y la nación venezolanas, incapaz hasta de preservar las propias fronteras territoriales, elemento fundamental para la existencia de cualquier Estado. Tradicionalmente las principales amenazas al Estado Nacional venezolano han venido de las condiciones internas: caudillismo, atraso, incomunicación, escasez de recursos humanos, incapacidad gerencial, inmadurez política, dependencia petrolera... Ahora se unen fuertes amenazas externas: invasión cultural, penetración económica, dependencia política...

Correlativamente somos una sociedad indefensa. La gran carencia del sistema político venezolano es la ausencia de ciudadanos y de una sociedad civil organizada y madura, sujeto de las decisiones colectivas.

La complejidad del negocio de la droga ha puesto de manifiesto esta debilidad del Estado y nuestra indefensión como sociedad política.

Estamos, por tanto, ante un problema que trasciende lo policial para convertirse en político. Por eso, el debate se ubica donde no es si lo restringimos a la cuestión de la incapacidad o corrupción de los organismos policiales venezolanos.

Enfrentar policialmente esta forma de delito no es fácil. Su sofisticada organización y enorme capacidad de corromper todos los niveles de la acción represiva tanto policial como judicial lo convierten en una presa difícil de cazar. Resulta lógico, entonces, que se mejore la capacidad de los organismos policiales nacionales, que se diversifiquen las formas de lucha, se ajuste el marco jurídico, etc., para lo cual es bienvenido el asesoramiento de la DEA y otros organismos internos o externos.

Nosotros sabemos que la policía venezolana es técnicamente buena. Lo ha sabido demostrar en múltiples oportunidades. De aquí deducimos que la incapacidad de la policía venezolana para enfrentar el auge del tráfico de drogas está más vinculada a la incapacidad política que a la incapacidad técnica. Las policías no son entes abstractos que funcionan en el vacío, forman parte de un Estado concreto, con unas vinculaciones sociales específicas y subordinadas a una acción de gobierno. El mejor policía, sumergido en una sociedad corrompida, un sistema judicial permeable y un gobierno blando, es ineficaz.

Igualmente sabemos que los cuerpos policiales norteamericanos -basta ver un poquito de televisión enlatada y leer algunas publicaciones- es no sólo corruptible, sino propensa a la corrupción y llena de casos de corrupción por drogas. A pesar de toda la propaganda que nos llega, no ha podido controlar ni el consumo, ni el tráfico de drogas en EE.UU., ni, menos aún, el lavado de dólares. Su capacidad técnica no ha quedado tan bien parada. Y no podemos olvidar que la DEA, y el gobierno que traza sus políticas, tiene proyectos, maneras de actuar e intereses que no son necesariamente los de un país como Venezuela ni los del continente latinoamericano.

Si vamos más a fondo encontramos que la difusión creciente del consumo y consiguiente distribución y tráfico de drogas está vinculado a los valores en los que se fundamenta la cultura occidental actual. Que tantos millones de personas recurran a drogadicción, como al alcohol o al tabaco..., como formas de alcanzar objetivos vitales o de llenar vacíos existenciales en un mundo donde las dos terceras partes de sus habitantes no tiene resueltas ni las condiciones elementales de la vida humana, donde la injusticia es el denominador común de las relaciones sociales e internacionales y la solidaridad de los grandes con los pequeños brilla por su ausencia, señala el meollo de la cuestión.

A eso se une una constante difusión de información parcializada sobre los distintos aspectos de la complejidad del negocio de la droga. Este no es un negocio de pobres ni de pequeños comerciantes. El sistema financiero del Caribe y de toda América Latina no tiene capacidad para "lavar" el volumen de dinero sucio que produce el consumo de más veinte millones de adictos a la cocaína en los Estados Unidos de Norteamérica. Cómo es que no se descubren y tapan los canales de lavado de narcodólares existentes en el sistema financiero norteamericano, europeo y japonés. Por qué no se hace "noticia" de este problema.

La seriedad y magnitud del problema de la droga no debe, pues ofuscarnos. Detrás de él se mueven intereses de la más diversa índole y también políticos. Mientras no se trate con los Estados Unidos en términos de igualdad, respeto a las respectivas autonomías y colaboración mutua, reconociendo que se trata de un problema común, especialmente grave dentro de la sociedad norteamericana, tenemos razones profundas para sospechar que se trata de un hilo más para amarrarnos, un nuevo atentado a la soberanía de las naciones latinoamericanas y un nuevo obstáculo para el crecimiento autónomo y humano de nuestros pueblos.